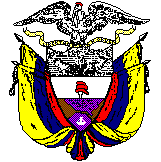
**

Radicado: 2019-0626

JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL MUNICIPAL

Medellín, junio ocho ( 08 ) de dos mil veinte.

Procede el despacho a proferir sentencia anticipada escrita dentro del presente proceso ejecutivo de mínima cuantía, instaurado por COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP con NIT.890.907.772-0, por intermedio de apoderado judicial y en contra de LADY GIOANA TEJADA VÉLEZ con c.c. 32.150.365 y DANIEL ANTONIO TORRES con c.c. 98.668.773, iniciado mediante demanda presentada el 12 de junio de 2019, en aplicación del art. 278 numeral 2° del Código General del Proceso, como más adelante se precisará la viabilidad de tal forma de resolución de la litis.

Proceso en el que se libró mandamiento de pago a favor de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP y en contra de LADY GIOANA TEJADA VÉLEZ y DANIEL ANTONIO TORRES, mediante auto del 15 de julio de 2019, por las sumas de:

$ 11.030.294 como capital, más los intereses moratorios liquidados mes a mes a la tasa que para el efecto certifique la Superintendencia Financiera de Colombia, esto es, y ese es el sentido de la orden de pago, a la tasa equivalente a la una media veces el interés bancario corriente, cobrados a partir del 11 de septiembre de 2018 y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

De otro lado, los señores LADY GIOANA TEJADA VÉLEZ y DANIEL ANTONIO TORRES, fueron notificados personalmente del auto que libró mandamiento de pago el día 28 de agosto de 2019, fecha en la que comparecieron al despacho, según obra a folios 22.

Ahora bien, el 10 de septiembre de 2019, oportunamente, los codemandados, en nombre propio, presentaron en la oficina de apoyo judicial, escrito contentivo de las excepciones de mérito que proponen, según obra de folios 23 a 33, las cuales, en gran resumen consisten en:

La rotulada de INEXISTENCIA DE CAUSA PARA DEMANDAR. Cimentada en que, aunque tienen conocimiento de la obligación dineraria a su cargo, no se han negado a pagarla. Que creían tener un acuerdo con la abogada de la parte actora, la dra. NATALIA RIVERA, el cual, afirman, estaban cumpliendo a cabalidad. Que el retardo en el pago se presentó porque uno de los codemandados quedó sin empleo y el otró debió cubrir todas las obligaciones del hogar. Que, fue una situación imprevista el no poder continuar con el pago de dicha obligación, que, sin embargo al normalizarse la situación laboral, se contactaron con los encargados del préstamo para ponerse al día con la obligación. Que lo afirmado aquí, lo demostrarán con las pruebas que aportan.

La rotulada de PAGO PARCIAL. Cimentada en que, han estado pagando parcialmente la obligación, que por ello, no es cierto que en este momento deban la totalidad de ésta. Que, la demandante se ha sustraído de la obligación de computar los pagos parciales realizados por ellos, según acuerdo al que llegaron verbalmente con la apoderada, doctora NATALIA RIVERA. Que ello, lo demuestran con las conversaciones de Whatsapp sostenidas y que además lo acreditan con los recibos que aportan, los cuales relacionan así: diciembre de 2018 $300 000; 19 de enero de 2019 $300.000; 28 febrero de 2019 $300.000; 14 de marzo de 2019 $350.00; 19 de marzo de 2019 $250.000; 19 de abril de 2019 $300.000; 19 de mayo de 2019 $300.000; 19 de junio de 2019 $250.000; 02 de julio de 2019 $250.000 y 31 de julio de 2019 $500.000.

La rotulada de TEMERIDAD Y MALA FE. Cimentada en que, se ha formulado una demanda ejecutiva basada en obligaciones, que en parte ya han sido canceladas por ellos y que, se ha procedido a llenar de manera ilegal el título valor, base de recaudo ejecutivo.

La rotulada de FALSEDAD IDEOLÓGICA EN EL TITULO VALOR BASE DE RECAUDO. Cimentada en que, el título valor (pagaré) fue llenado de manera arbitraria e ilegal, falseando la verdad y lo autorzado por ello en la carta de instrucciones. Que, ello, teniendo en cuenta que el valor allí establecido no era el valor legal de lo adeudado.

La rotulada de NO EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN POR NO EXISTIR MORA. Cimentada en que, la mora es uno de los principales presupuestos de la responsabilidad civil contractual y que, es entendida como el retardo culposo o injustificado en el cumplimiento de la obligación debida. Que, tanto el deudor como el acreedor de obligaciones pueden incurrir en mora. Afirman los codemandados que, la constitución en mora del deudor puede hacerse de forma automática o a través de requerimiento judicial, y lo cual explican así: *“(i) En las obligaciones puras y simples hay mora cuando el acreedor interpela judicialmente al deudor para su cumplimiento, (ii) En las obligaciones sometidas a plazo o en aquellas en las que la ley indica el término en que deben ser atendidas la mora se produce automáticamente una vez se cumpla el plazo dispuesto por el contrato o por la ley, (iii) En las obligaciones sometidas a condición hay mora cuando, acaecida la condición, el acreedor interpela judicialmente a su deudor para el cumplimiento (art. 1608 del Código Civil)”.*

Aducen que, no hay constitución en mora automática, que, se necesita la interpelación o requerimiento judicial a instancias del acreedor. Que, esta interpelación consiste en la solicitud hecha a un juez para que indique el término dentro del cual el deudor debe cumplir su obligación. Que, de conformidad con el artículo 94 del Código General del Proceso, la sola notificación de la demanda o del mandamiento de pago en los asuntos contenciosos produce los efectos de requerimiento judicial para constituir en mora. Que, desde la constitución en mora, se producen los siguientes efectos: *“(i) el deudor responde por los perjuicios sufridos por el incumplimiento de la obligación (art 1615 del Código Civil); (ii) por regla general, el deudor debe responder ante su acreedor incluso en hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor (art. 1607 del Código Civi.) (iii) el acreedor está en la posibilidad de ejercer la acción de cumplimiento o la resolutoria, en ambos casos con indemnización de perjuicios (artículos 1546 ibid. y 870 del Código de Comercio) y (iv) en las obligaciones mercantiles de carácter dinerario, el deudor está obligado a pagar los intereses de mora sobre el capital debido (art. 65 de la Lev 45/1990)”.*

La rotulada de IMPOSIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN - TEORÍA DE LA IMPREVISION - REQUISITOS Y EFECTOS. Cimentada en que, esta teoría radicalmente distinta de la noción de error y de fuerza mayor, tiene por base la imprevisión. Afirman que, se trata de hechos extraordinarios posteriores al contrato y que no hayan podido ser previstos por las partes. Que, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligación, lo dificultan en forma extrema, haciéndolo tan oneroso, que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad. Que, no se trata en suma de una imposibilidad absoluta de cumplir, lo que constituye la fuerza mayor, sino de una imposibilidad relativa, como la proveniente de una grave crisis económica o incluso de un acto del hombre, ajeno a la voluntad de los partícipes en el contrato.

Refieren que, consiste, en un remedio de aplicación extraordinaria. Que, las nuevas circunstancias exceden en mucho las previsiones que racionalmente podían hacerse al tiempo de contratar, y que esos acontecimientos son de tal carácter y gravedad que hacen intolerable la carga de la obligación para una de las partes, amén de injusta y desorbitante ante las nuevas circunstancias. Que, todo esto, requiere la concurrencia de un conjunto de hechos complejos y variados que debe alegarse y probarse y es materia de decisiones especiales de los jueces de instancia. Los codemandados, igualmente ponen de presente un apartado de la Sentencia de mayo 23 de 1938 de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Arturo Tapias Piloneta, que por su extensión y por economía del discurso, este despacho remite al texto.

Manifiestan los codemandados que, como consecuencia de la aplicación de la teoría de la imprevisibilidad, se genera la suspensión del contrato ya que, aducen, siempre opera en los eventos en que los fenómenos imprevisibles, imprevistos y extraordinarios que han afectado el contrato, son temporales, efímeros, pasajeros, de duración determinada o determinable. Que, a tal punto que el juez llega a la certeza, que mientras subsistan las circunstancias de alteración, el contrato no podrá ejecutarse sin generar iniquidad. Que, una vez desaparecidas las causas de la imprevisión, es susceptible de reanudarse la normal ejecución del contrato. Que, en estos eventos, en lugar de ordenar la terminación o resciliación del contrato, puede optar por suspender el cumplimento de las prestaciones a cargo de la parte afectada, hasta el momento en que se modifiquen las circunstancias que afectan el contrato, restableciéndose la normalidad existente al momento de contratar. Que, el término de la suspensión debe quedar clara y expresamente definido por el juzgador, que, no puede estar supeditado a la voluntad de las partes contratantes, ni señalarse como indefinido, ni sujetarse a una condición, pues, afirman, esto atentaría contra la seguridad jurídica y dejaría a las partes en una situación peor que la que motivó el que recurrieran al aparato jurisdiccional.

Afirma la parte demandada que, conforme a la prueba documental que aportaron, el señor DANIEL quedó cesante en sus labores, única fuente de ingresos de la que disponía, y que, de la cual estaba cumpliendo cabalmente con sus obligaciones hasta el momento de cesar en el pago de las cuotas correspondientes. Que, debido a dicho imprevisto, la señora LADY acudió directamente a la entidad accionante, a efectos de proceder a solucionar el problema, solicitando se procediera a una nueva refinanciación. Que ello, lo prueba con cartas que envió a la oficina de abogados y la cooperativa, sin obtener respuesta. Que, conforme a la teoría de la imprevisión, la accionante debió al menos presentar una propuesta de refinanciación antes de proceder a entrar a ejecutar el título valor. Que, la forma como lo hizo, demuestra mala fe, si se tiene en cuenta que han estado cumpliendo con sus obligaciones en la forma y términos planteados.

Finalmente, en el escrito de excepciones, los codemandados solicitaron al despacho que declarara la prosperidad de las excepciones propuestas; que, en aplicación de la teoría de la imprevisibilidad, ordenara a la demandante reestructurar su crédito, que condenara a la demandante a las sanciones a que hace referencia el artículo 274 del CGP y que, condenara en costas a la parte demandante. Igualmente solicitaron que se tuvieran como prueba los recibos de pago, las conversación por Whatsapp aportadas, los comprobantes de nómina aportados, las cartas enviadas a ORBISCOOP Y GRUPO GER ABOGADOS aportadas y la liquidación de crédito aportada. Adicionalmente, solicitó que, con base en el artículo 600 del CGP, se efectuara la reducción de los embargos decretados, solicitud que se resolvió por auto del 16 de octubre de 2019, obrante a folios 62, accediéndose a ello.

De tales excepciones, como se evidencia a folio 62, se corrió traslado a la parte demandante por el término de diez días, para que se pronunciara y aportase las pruebas que pretendiese hacer valer, quien, por intermedio de su apoderado judicial, oportunamente, se pronunció, así:

Con relación a la excepción de INEXISTENCIA DE CAUSA PARA DEMANDAR, afirma que, no obra un acuerdo de pago entre las partes, que diferente es que, a los demandados se les aceptaran pagos con el fin de disminuir su obligación. Que, el hecho de que los demandados realizaran abonos, no significa que no pudiera acudirse a la vía legal con el fin de hacer efectiva la obligación. Que ello, toda vez que existe un título valor que cumple requisitos de ley.

Con relación a la excepción de PAGO PARCIAL, afirma, de un lado, tal como se expresó al contestar el hecho segundo, que en ningún momento esos abonos han sido negados por la parte demandante; y que, FUERON IMPUTADOS A CAPITAL, que los abonos de las fechas anteriores a la radicación de la demanda, OÍGASE BIEN, SE TUVIERON EN CUENTA AL MOMENTO DE LLENAR EL PAGARÉ, concretamente los siguientes pagos: De: 17 de diciembre de 2018 $300.000, 15 de enero de 2019 $300.000, 28 de febrero de 2019 $300.000, 14 de marzo de 2019 $350.000, 29 de marzo de 2019 $ 250.000, 15 de abril de 2019 $300.000, 2 de mayo de 2019 $300.000. Para un total de 2.100.000. De otro lado, se afirma al replicar de las excepciones, que esos pagos, indicados por los codemandados, ya fueron imputados al capital y tenidos en cuenta al momento de instaurar la demanda. Que ello, significó una disminución de la obligación. Que, por tal razón no podrán tenerse como prueba los comprobantes de éstos, aportados por la parte demandada.

Que, es por esa razón que, solo podrán ser tenidos en cuenta para el presente proceso los abonos siguientes, que SE RECONOCEN, REALIZADOS CON POSTERIORIDAD A LA RADICACIÓN DE LA DEMANDA, realizados con fechas de: 19 de junio de 2019 $ 250.000, 2 de julio de 2019 $250.000 y 31 de julio de 2019 $500.000. Que, no se han negado los pagos, o se ha omitido hacer los respectivos descuentos y que por esa razón no debe tenerse en cuenta esta excepción de pago.

Con relación a la excepción de TEMERIDAD Y MALA FE. Afirma que, la buena fe se presume, y que será de carga de los demandados demostrar que se está actuando con mala fe. Que, así lo indica el artículo 835 del Código de Comercio, texto al que por economía del discurso remite este despacho. Que, respecto a la existencia de la deuda, la parte demandada acepta deber un dinero a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORBISCOOP y que, con ello, los demandados están aceptando tanto la existencia del título como la deuda misma. Que, inicialmente se contaba con la información con la que se presentó la demanda y que contestada la misma, se procedió a aceptar el pago parcial excepcionado, conforme a la confirmación de los mismos. Que ello, no genera temeridad o mala fe. Que, se está reconociendo el pago parcial y que, la parte demandada, reconoce que adeuda un resto de dinero sumado a los intereses moratorios correspondientes. Que, por esta razón el proceso debe seguir hasta el pago total de lo debido.

Con relación a la excepción de FALSEDAD IDEOLÓGICA EN EL TITULO VALOR BASE DE RECAUDO. Afirma no estar de acuerdo. ADUCE QUE, EL TÍTULO VALOR SE LLENÓ TENIENDO EN CUENTA EL TENOR LITERAL DEL MISMO, Y CONFORME A LAS PAUTAS DADAS POR EL DEMANDADO EN LA CARTA INSTRUCCIONES. Y que, en concordancia con el artículo 622 del código de comercio, fue diligenciado el pagaré en blanco suscrito por el deudor, que, esto es previa revisión de la carta de instrucciones. Para lo cual aporta el contenido de dicho artículo, al cual remite el despacho por economía del discurso.

Que, en este caso tanto el pagaré como la carta de instrucciones fueron conocidas por los demandados y que, de igual manera, firmados ambos documentos por los demandados LADY GIOANA TEJADA VELEZ y DANIEL ANTONIO TORRES. Que, es por tal razón que no hay alteración de palabras, cantidades o fechas en el contenido del título valor ejecutado. Que, el artículo 626 del Código de Comercio indica lo que conlleva legalmente la firma y aceptación de un documento. Afirma que, de igual manera, la Superintendencia Bancaria hace referencia en la Circular DB- 010 de 1985, a los documentos título valor con espacios en blanco indicando que respecto a la carta de instrucciones esta debe constar en un documento independiente el cual debe contener:  *“1. Clase del título valor. 2. Identificación plena del título sobre el cual se refieren las instrucciones.3.Elementos generales y particulares del título. 4. Eventos y circunstancias que facultan al tenedor del título valor para llenarlo”.* Aduce la demandante, que estas especificaciones las contiene el título valor aportado en la demanda, que, el mismo que cumple los requisitos de ley y que, por ende presta mérito ejecutivo y contiene obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles.

Con relación a la excepción de NO EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN POR NO EXISTIR MORA. Afirma que, cuando se incumple una obligación esto conlleva a la existencia de mora. Que, es así como, debido al incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas y aceptadas por la parte demandada, se generaron unos intereses de mora y que, estos serán cobrados teniendo en cuenta el máximo legal establecido. Que la causación del interés moratorio se genera a partir de la fecha en que se incurre en mora y durante todo el tiempo de la misma. Ello lo afinca en el artículo 65 de la ley 45 de 1990:

*"Artículo 65. Causación de intereses de mora en las obligaciones dinerarias. En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dinerada se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación”.*

Con relación a la excepción de IMPOSIBIIDAD DE LA EJECUCION - TEORIA DE LA IMPREVISION REQUISITOS Y EFECTOS. Afirma que, esta teoría de la imprevisión no aplica para los procesos ejecutivos. Que, por tal razón solicita al juez no tenerla en cuenta.

Finalmente, solicita al despacho que, sean desestimadas las excepciones presentadas por la parte demandada y que, en consecuencia se acceda a las pretensiones solicitadas en la demanda. Que se ordene seguir adelante con la ejecución en contra de la parte demandada y a favor de la parte demandante, tal y como fue reconocido en el Auto que libró mandamiento de pago. Aduce que anexa, los soportes de los pagos recibidos y el estado de cuenta aportado por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORBISCOOP.

Es de resaltar que la parte demandada para cimentar las excepciones de mérito argüidas no solicitó prueba oral alguna, sí en cambio, aportó pruebas documentales; y, la parte actora al descorrer el traslado de las excepciones igual actitud probatoria asumió. En suma, los escritos de formulación de las excepciones de mérito propuestas en el ejercicio del derecho de contradicción y de contestación a dichas excepciones, están huérfanos de solicitud de prueba alguna. Y como ello es así, de entrada se afirma se da la hipótesis del num. 2° art. 278 del Código General del Proceso, para proferir sentencia anticipada en el sentido en que la misma procede y acá se glosa lo expresado por el legislador en dicho numeral 2°, “ Cuando no hubiere pruebas por practicar.”; siendo así que con la demanda se aportó el documento base de recaudo ejecutivo, a saber pagaré No.19847 que cimentó el mandamiento de pago, documento el cual no fue cuestionado, tachado de falso por la parte demandada, como para que estuviese pendiente del ejercicio de actividad probatoria en busca de la posibilidad de la desvirtuación de la presunción de autenticidad que acompasa a los títulos valores, de conformidad con el art. 244 del Código General del Proceso y 793 del Código de Comercio.

Sobre la viabilidad de la sentencia anticipada escrita en estos asuntos, lo expresa el inciso 3° del art. 278 del Código General del Proceso, en “ … cualquier estado del proceso, …” remite el despacho a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en Sala de casación civil, en la sentencia SC1902-2019-2018-01974-00, proferida el 4 de junio de 2019, expediente nro. 11001020300020180197400, M.P. MARGARITA CABELLO BLANCO, en primera instancia, y a la doctrina expuesta en la sentencia proferida en sede de tutela el 27 de abril de 2020, expediente radicado nro. 47001221300020200000601, M.P. OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE, en que dándosele prevalencia a los principios de la economía procesal y celeridad, se abre paso tal forma de resolución de la litis.

En efecto, en la sentencia SC1902-2019-2018-01974-00 nuestro Máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria expresó:

“ De lo anterior, se desprende que los jueces tienen la obligación de, una vez advertido el no cumplimiento del debate probatorio o que de llevar este último a cabo resultaría inocuo, proferir el fallo sin adicionales trámites, en cabal cumplimiento de lo expuesto por los principios celeridad y economía procesal, que, en últimas, reclaman de la jurisdicción decisiones prontas, *«con el menor número de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas».* De no ser así, sería someter cada causa a una prolongación absurda, completamente injustificada, en contra de los fundamentos sustanciales y procesales que acompañan los trámites judiciales.

2.- Al respecto, recientemente ha mencionado esta Corporación que

“ Tal codificación, en su artículo 278, prescribió que «[e]n cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial… [c]uando no hubiere pruebas por practicar.

Significa que los juzgadores tienen la obligación, en el momento en que adviertan que no habrá debate probatorio o que el mismo es inocuo, de proferir sentencia definitiva sin otros trámites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad fáctica sobre los supuestos aplicables al caso.

Por consiguiente, el respeto a las formas propias de cada juicio se ve aminorado en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, que reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor número de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total que las formalidades están al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deberán soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisión inmediata.

En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y economía procesal, lo que es armónico con una administración de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial (CSJ SC132-2018. 12 Feb. 2018. Rad. 2016-01173-00).”

Y en la sentencia de abril 27 de 2020 manifestó:

“ En síntesis, la permisión de sentencia anticipada por la causal segunda presupone: **1.** Que las partes no hayan ofrecido oportunamente algún medio de prueba distinto al documental; **2.** Que habiéndolas ofertado éstas fueron evacuadas en su totalidad; **3.** Que las pruebas que falten por recaudar fueron explícitamente negadas o desistidas; o **4.** Que las probanzas faltantes sean innecesarias, ilícitas, inútiles, impertinentes o inconducentes.

( … ) Significa que, según esta visión, para emitir el fallo prematuro por el motivo abordado es indispensable que esté dilucidado explícitamente el tema de las pruebas, lo que es fácilmente comprensible en las tres primeras alternativas antes vistas, es decir, cuando las partes no hayan ofrecido oportunamente algún medio de prueba distinto al documental;habiéndolas ofertado éstas se hayan evacuado en su totalidad;o que las pruebas que falten por recaudar han sido expresamente negadas o desistidas.

Sin embargo, si el *iudex* observa que las pruebas ofertadas son innecesarias, ilícitas, inútiles, impertinentes o inconducentes, podrá rechazarlas ya sea por auto anterior con el fin de advertir a las partes, o en la sentencia anticipada, comoquiera que el artículo 168 aludido dispone genéricamente que el rechazo de las pruebas por esas circunstancias se hará “*mediante* ***providencia*** *motivada*”, lo que permite que la denegación pueda darse en la sentencia, porque no está reservada exclusivamente para un auto.

( … ) En suma, cuando el juez estima que debe dictar sentencia anticipada dado que no hay pruebas para practicar, debe decidirlo mediante auto anterior, si así lo estima, o en el texto del mismo fallo con expresión clara de los fundamentos en que se apoya.

(… ) En torno a ese aspecto corresponde diferenciar el momento en que el juzgador se persuade de que «*no hay pruebas por practicar*», ya que si alcanza ese convencimiento en la fase introductoria del proceso, es decir, antes de convocar a audiencia inicial, no es indispensable programar la vista pública, sino dictar el fallo anticipado en forma escrita.”.

Lo que se quiere significa entonces es que en este asunto procede proferir sentencia escrita, como en efecto se hace, anticipadamente, en esta etapa liminar del juicio, por cuanto no hay pruebas por practicar, para lo cual valgan las siguientes

CONSIDERACIONES:

Resolviendo sobre las defensas aducidas por la parte demandada, debe señalarse en primer lugar, que el pago de una obligación contenida en un título valor puede realizarse en forma voluntaria, o mediante la ejecución forzosa. En lo primero, la regulación legal aplicable para el efecto es la de carácter sustancial establecida por el Código de Comercio; y, cuando el pago no fuere voluntario, si el acreedor acude a la jurisdicción del Estado, su pretensión habrá de decidirse en proceso que, por su propia índole, es de carácter contencioso y se rige por los arts. 422 y ss. del C. General del Proceso.

Esta norma - art. 422 – consagra un mecanismo para que el acreedor logre que su crédito sea satisfecho coercitivamente cuando quiera que el mismo no ha sido pagado en forma voluntaria por el deudor. Así, prescribe que pueden demandarse ejecutivamente, entre otras, las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documento que provenga del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él.

Se han tenido como documentos con tal carácter los títulos-valores, en relación con los cuales el art. 621 del Código de Comercio prevé que deben contener la mención del derecho que en los mismos se incorpora y la firma de quien los crea. De tal suerte que, sin la reunión de tales de exigencias, no producen eficacia jurídica alguna -art. 620 *ídem*.-.

La codificación comercial también establece algunos requisitos específicos para cada clase de título-valor. Para la letra de cambio preceptúa en su art. 671 que debe contener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, la forma la forma de vencimiento y la indicación de ser pagadera a la orden o al portador.

Los títulos-valores están regidos por principios como el de la incorporación, el de la legitimación, el de la literalidad y el de la autonomía. El de la literalidad mide la extensión o dimensión de los derechos y obligaciones - arts. 626 y 631 C. de Co . Por eso, el título vale por lo que manifiesta textualmente.

Es de anotar que así como la acción cambiaria es el medio para que el tenedor de un título valor haga valer los derechos incorporados en el documento, de igual manera la excepción aparece como el instrumento de defensa otorgado por la ley para los ejecutados frente a las pretensiones del demandante. La excepción consiste en la oposición a las pretensiones de la demanda, es una forma especial de ejercer el derecho de defensa o de contradicción a favor del demandado.

En el presente caso se aportó a la demanda, pagaré No.19847 con carta de instrucciones firmados por los codemandados LADY GIOANA TEJADA VÉLEZ y DANIEL ANTONIO TORRES, en el que se incorpora el derecho de crédito dinerario por la suma de $ 11.030.294, con fecha de vencimiento del 10 de septiembre de 2018. Documento que por reunir los requisitos de los artículos 621 y 709 del C. de Comercio, dio lugar al mandamiento de pago ejecutivo a cargo de los codemandados ya historiado.

Ahora bien, pronunciándose el despacho con relación a la excepción de inexistencia de causa para demandar debe señalarse que ésta no está llamada a prosperar. Ello en atención a que no hay tal inexistencia; por el contrario, existe la causa para demandar, toda vez que, la obligación existe y, así la admitieron los codemandados en el escrito de las excepciones, aduciendo que, “… mi esposo y yo tenemos claro que debemos la plata …” así lo dijo la parte demandada; igualmente, lo afirmaron al manifestar de ser cierto el hecho primero de la demanda, en el que se relata que los codemandados suscribieron y se obligaron al pago de un título valor a favor de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP, el día 16 de mayo de 2017.

Con relación a la excepción de pago parcial, debe señalarse en primer lugar que: según el numeral 7° del art. 784 del Código de Comercio, la excepción que se funde en quitas o en pago total o parcial, siempre debe constar en el título, norma concordante con lo dispuesto en el art. 624 de la misma codificación, en virtud del cual el ejercicio del derecho consignado en un título valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague**,** salvo que el pago sea parcial o sólo de los derechos accesorios, caso en el cual, se repite, el tenedor deberá anotarlo en el título y extender por separado el recibo correspondiente. Pero, si el pago no consta en el título podrá hacerse valer, con fundamento en el numeral 13° del art. 784 del Código de Comercio, entre las partes inmediatas que faculta proponer como excepciones lo dice la norma “las demás personales que pudiere oponer el demandado contra el actor”.

La parte demandada, argumenta para cimentar la excepción de pago parcial que, a contrapelo de las sumas de dinero que cobra la demandante, ha efectuado pagos parciales que, no han sido imputados a la obligación, que ello se acredita con los recibos que aporta, los cuales suman un total de $3.100.000, pagados en diez abonos, en fechas que van desde el mes de diciembre de 2018 hasta el 31 de julio de 2019. Expresando así, en claro sentido, que lo cobrado, a saber, capital por $ 11.030.294 y los intereses moratorios a partir de septiembre 11 de 2018, no incluye los expresados pagos o abonos parciales, de los que refiere, aporta comprobantes.

Precisamente, con relación a la excepción de pago parcial, el abogado demandante al descorrer el traslado que se le concediera, aceptó los últimos tres pagos indicados por los demandados, los posteriores a junio de 2019, en ese sentido confesó los pagos dichos y en ese aspecto prosperará la excepción de pago parcial, en aplicación del art. 193 en armonía con el art. 191 del Código General del Proceso.

Ahora bien, con relación a los demás abonos o pagos parciales alegados por la parte demandada adujo que los anteriores a dicha fecha fueron imputados a capital al momento de llenar el pagaré. Ahora bien, teniendo en cuenta que la misma parte, la demandante, dice que el pagaré se llenó estrictamente, de acuerdo con las instrucciones del mismo, el despacho concluye que, de conformidad con el numeral 1ro del la carta de instrucciones del pagaré, como allí se dice que la fecha de emisión del pagaré sería el día en que fuera llenado, y que la fecha de vencimiento sería al día siguiente de la fecha de emisión del mismo, entonces, siendo ello así, el pagaré fue llenado el día antes de la fecha que aparece allí, de septiembre 10 del 2018, es decir que fue llenado el 9 de septiembre de 2018. Ello significa que, todos esos los abonos fueron con posterioridad a la fecha de exigibilidad del pagaré, la de su vencimiento, en atención a lo cual, el despacho concluye que, el pago parcial si existe, y por ende se va a reconocer. TODOS LOS PAGOS PARCIALES ALEGADOS, SE REPITE, SE HICIERON CON POSTERIORIDAD AL DÍA EN QUE FUE LLENADO EL PAGARÉ Y, CORRELATIVAMENTE, CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE VENCIMIENTO o septiembre 10 de 2018, por lo que lógicamente, se imputarán a la obligación demandada, deviendo próspera la excepción de mérito de pago parcial impetrada.

De conformidad con lo precedente, se han de tener en cuenta o reconocer todos los abonos informados por la parte demandada, así:

$ 300.000 en diciembre 17 de 2018, de conformidad con el pdf. Pág. 45. ( traslado electrónico ).

$ 300.000 en enero 15 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 48 ( folio 37 ). ( trasferenicia ).

$ 300.000 en febrero 28 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 46.( traslado electrónico ).

$ 350.000 en marzo 14 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 47. ( traslado electrónico ).

$ 250.000 en marzo 29 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 48 ( folio 37 ). (trasferencia ).

$ 300.000 en abril 15 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 48 ( folio 37 ). (trasferencia ).

$ 300.000 en mayo 5 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 48 ( folio 37 ).(trasferencia ).

$ 250.000 en junio 19 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 49. ( traslado electrónico ).

$ 250.000 en julio 2 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 51. ( traslado electrónico ).

$ 500.000 en julio 31 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 52 (transferencia electrónica).

Pronunciándose el despacho con relación a la excepción de temeridad y mala fe, por supuesto que no hay lugar a inferir temeridad o mala fe de la demandante , como para que ello tuviese implicaciones de cara a la responsabilidad que la temeridad o mala fe entraña; sin que se haya probado elemento adicional alguno como para imputar en esta sentencia en ese sentido una actuación torva, con mayor razón presumiéndose como así se hace, en dichas actuaciones la buena fe, como se impone en el art. 83 de la Constitución Nacional. Por lo tanto se declarará improcedente la excepción de mérito de temeridad y mala fe.

Pronunciándose el despacho con relación a la excepción de falsedad ideológica en el título valor base de recaudo. Respecto de la falsedad ideológica no está acreditado, que se haya llenado el título valor de manera arbitraria contrayendo las instrucciones de la carta de instrucciones. Es que la presunción de que el título valor se llenó conforme a las instrucciones dadas, emerge también del contenido del artículo 835 del Código de Comercio que consagra la presunción de buena fe aún exenta de culpa y que radica la carga de probar en contrario, más concretamente, de probar la mala fe o la culpa de una persona en quien la alegue. Confróntese con la norma.

Pronunciándose el despacho con relación a la excepción de no exigibilidad de la obligación por no existir mora. Debe señalarse que la misma no está llamada a prosperar y es que, conforme a lo dispuesto en el artículo 422 del Código General del Proceso, *“pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él… (...)”*. De conformidad con la norma legal citada, sea cual fuere el origen de la obligación contenida en el documento público o privado, para que pueda demandarse ejecutivamente requiere de ciertas características: *“… (iii) Que la obligación sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o, que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido ésta, sea por mandato legal o por acuerdo entre las partes contractuales. (Juan Guillermo Velásquez. De los procesos ejecutivos)”*. Circunstancias que de conformidad la documentación aportada con la demanda, acontecieron en el caso en concreto.

Pronunciándose el despacho con relación a la excepción de imposibidad de la ejecucion - teoria de la imprevision requisitos y efectos. Debe señalarse que la misma no está llamada a prosperar en atención a que, la teoría de la imprevisión, no se aplica en este caso. Ello es así, toda vez que, en el caso de marras, no se está en presencia de los supuestos normativos consagrado en el artículo 868 del Código de Comercio, a saber *“Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión”*. Tema abordado en extenso en la Sentencia del 21 de febrero de 2012 de la Corte Suprema de Justicia. M.P. William Namén Vargas

Se condenará a la parte demandada al pago de las costas procesales, en aplicación del art. 365, numeral 1° del Código General del Proceso, al resultar vencida en este juicio.

Las agencias en derecho se tasan en el 5% del valor total del pago ordenado en esta sentencia, en aplicación del numeral 4º del artículo 366 del Código General del Proceso, y en aplicación del Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2.016, artículo 5º, numeral 4°, literal A, inciso 2°, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; arrojando por agencias en derecho la suma de $ 635.000.

Por lo expuesto el JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN - ANTIOQUIA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

FALLA

1º DECLARAR próspera la excepción de PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACION, por las cantidades y en las fechas que a continuación se expresan:

$ 300.000 en diciembre 17 de 2018, de conformidad con el pdf. Pág. 45. ( traslado electrónico ).

$ 300.000 en enero 15 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 48 ( folio 37 ). ( trasferenicia ).

$ 300.000 en febrero 28 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 46.( traslado electrónico ).

$ 350.000 en marzo 14 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 47. ( traslado electrónico ).

$ 250.000 en marzo 29 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 48 ( folio 37 ). (trasferencia ).

$ 300.000 en abril 15 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 48 ( folio 37 ). (trasferencia ).

$ 300.000 en mayo 5 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 48 ( folio 37 ).(trasferencia ).

$ 250.000 en junio 19 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 49. ( traslado electrónico ).

$ 250.000 en julio 2 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 51. ( traslado electrónico ).

$ 500.000 en julio 31 de 2019, de conformidad con el pdf. Pág. 52 (transferencia electrónica).

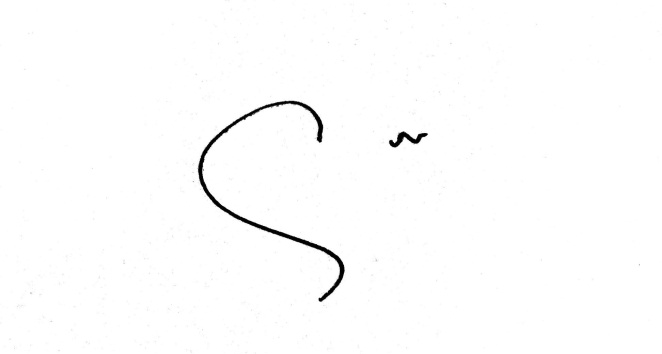
Excepción de mérito propuesta por los codemandados LADY GIOANA TEJADA VÉLEZ y DANIEL ANTONIO TORRES, dentro del presente proceso ejecutivo instaurado en su contra por COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO ORBISCOOP. Se ordena que al momento de la liquidación del crédito se imputen dichos abonos, primero a intereses y luego a capital, por las cantidades y en las fechas indicadas.

2° Se declaran imprósperas las excepciones de mérito de inexistencia de causa para demandar, de temeridad y mala fe, de falsedad ideológica en el titulo valor base de recaudo, de no exigibilidad de la obligación por no existir mora y de imposibilidad de la ejecución - teoría de la imprevisión - requisitos y efectos.

3° Se ordena continuar adelante la ejecución en la forma dispuesta en el mandamiento de pago, pero imputando al momento de la liquidación del crédito los abonos o pagos parciales reconocidos en este fallo, por las cantidades y en las fechas señaladas, primero a intereses y luego a capital.

4° Se condena en costas a la parte demandada, a favor de la parte demandante, liquídense. En $ 635.000, se fijan las agencias en derecho a cargo de la parte demandada.

NOTIFÍQUESE



ELKIN BOTERO OCAMPO

JUEZ revfere